



NACIONES UNIDAS  
CONSEJO  
ECONOMICO  
Y SOCIAL



Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1155/Add.25  
22 noviembre 1974  
ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
31º período de sesiones

INFORMES PERIODICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

Informes sobre derechos económicos, sociales y culturales,  
correspondientes al período comprendido entre el 1º de  
julio de 1969 y el 30 de junio de 1973, recibidos de los  
gobiernos en virtud de la resolución 1074 C (XXXIX) del  
Consejo Económico y Social

NUEVA ZELANDIA

- I. DESCRIPCION PRELIMINAR CONCISA DE LAS POLITICAS GENERALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL QUE HAN CONTRIBUIDO SIGNIFICATIVAMENTE A GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO, LA EFECTIVIDAD Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE JULIO DE 1969 Y EL 30 DE JUNIO DE 1973

Nueva Zelanda ha tenido la fortuna de que legisladores esclarecidos hayan considerado apropiado expresar el espíritu igualitario desarrollado en los primeros años de la historia de la nación en un conjunto de leyes de mucho alcance encaminadas a garantizar el progreso físico, intelectual y espiritual de todos sus habitantes, sin discriminación alguna. En algunas de estas leyes Nueva Zelanda ha estado en la vanguardia de los demás países del mundo, siendo, por ejemplo, la primera nación que concedió a la mujer el derecho a votar (en 1893) y que estableció pensiones a la vejez.

A pesar de esta historia de esfuerzos legislativos, no se intentó realizar una planificación nacional de manera general hasta la celebración, en 1969, de la Conferencia Nacional de Desarrollo. El Consejo Nacional de Desarrollo, creado después de haberse realizado la Conferencia, fue encargado de asesorar al Gobierno sobre una amplia variedad de cuestiones económicas, sociales y culturales por intermedio de varios subconsejos formados por expertos del Gobierno, representantes del comercio y la agricultura y de muchos otros grupos de intereses.

En la sección III de este informe se trata brevemente la situación general reinante en Nueva Zelandia en relación con los individuos y los grupos de personas cuyos derechos necesitan una protección especial. En los casos en que procede hacerlo, se indican también las leyes aprobadas en el período que se examina.

A continuación figura una reseña de dos leyes sociales recientes que afectan a sectores más amplios de la comunidad y que no pueden ser incluidos satisfactoriamente en ninguna de las categorías señaladas, tan vasto en su alcance.

#### A. LA ACCIDENT COMPENSATION ACT, 1972

El 1.º de abril de 1974 entró en vigor la Accident Compensation Act, 1972. A partir de esa fecha no se podrán incoar ante los tribunales neozelandeses acciones judiciales por lesiones corporales (o fallecimiento resultante de ellas) causadas por accidentes ocurridos en Nueva Zelandia el 1.º de abril de 1974, o con posterioridad a esa fecha. En lugar de acciones judiciales por lesiones corporales, la ley establece tres regímenes para la indemnización de las personas que sufran lesiones causadas por accidentes.

En virtud del Régimen de Protección de los Trabajadores, y con sujeción a un número limitado de excepciones, toda persona que trabaja, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia, tiene derecho, en caso de lesiones corporales causadas por accidente, a una indemnización basada en la tasa de la remuneración recibida con anterioridad al accidente, haya o no ocurrido éste en el curso del trabajo.

En virtud del Régimen de Protección contra los Accidentes de Vehículos a Motor, tiene derecho a indemnización toda persona que sufra lesiones causadas por accidentes de vehículos de ese tipo. No obstante, si la persona que sufre esas lesiones trabaja, este derecho no la priva de la indemnización que le corresponde según el Régimen de Protección de los Trabajadores.

En virtud del tercer régimen, conocido con el nombre de Régimen Complementario, tiene derecho a indemnización toda persona que sufre lesiones causadas por accidente en circunstancias en que no se aplica ni el Régimen de Protección de los Trabajadores ni el Régimen de Protección contra los Accidentes de Vehículos a Motor. Debe aclararse que la aplicabilidad de la ley no se basa en consideraciones de nacionalidad sino en la presencia en Nueva Zelandia de la persona que, en razón de una lesión causada por accidente, se halle comprendida en los términos de uno de los tres regímenes. Esta aplicabilidad rige 24 horas por día.

La ley proporciona un sistema amplio de indemnización por lesiones causadas por accidente, reconociendo así la responsabilidad general de la comunidad por la ocurrencia de accidentes y por el cuidado de sus víctimas.

Las disposiciones de la ley abarcan lo siguiente:

a) Indemnización inmediata, sin prueba de negligencia, a toda persona lesionada, dondequiera que ocurra el accidente;

- b) Derecho a la persona lesionada a ser indemnizada tanto por incapacidad física permanente como por pérdida pecuniaria relacionada con las ganancias;
- c) Previsión de ajustes regulares en el nivel del pago de la indemnización a personas lesionadas de acuerdo con las variaciones del valor del dinero; y
- d) Promoción de la rehabilitación física y profesional de la persona lesionada.

B. LA LEGAL AID ACT, 1969 deroga la ley anterior de 1939 para facilitar la prestación de asistencia a personas de medios escasos o moderados. En virtud de esta ley se crea una Junta de Asistencia Jurídica, un Organismo de Apelaciones y Comités de Asistencia Jurídica de Distrito, y se estipula en la sección 15, la prestación de asistencia jurídica, con ciertas excepciones, a saber:

Todos los procedimientos civiles ante la justicia correccional o de paz;

Todos los procedimientos basados en denuncias ante el Tribunal de Menores;

Todos los procedimientos civiles originales ante la Corte Suprema, excepto los iniciados en virtud de la Matrimonial Proceedings Act, de 1963

Los procedimientos en virtud de la Matrimonial Proceedings Act, de 1963, que se realizan exclusivamente a los fines de ayuda complementaria;

Todos los procedimientos ante el Tribunal de Indemnizaciones;

Las apelaciones ante la Corte Suprema y el Tribunal de Apelaciones en procedimientos civiles e internos, distintos de las apelaciones relativas a la Matrimonial Proceedings Act, de 1963; y

Las apelaciones ante el Consejo Privado, con algunas excepciones.

II. INFLUENCIA QUE EJERCEN LOS INSTRUMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN QUE CONSTAN PRINCIPIOS Y NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, LA REALIZACION Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y, EN PARTICULAR, MEDIDAS ADOPTADAS PARA APLICAR TALES INSTRUMENTOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE JULIO DE 1969 Y EL 30 DE JUNIO DE 1973

En general, es difícil evaluar el grado en que la política relativa a los derechos económicos, sociales y culturales ha recibido influencia de instrumentos de las Naciones Unidas. Muchas de las leyes más importantes de Nueva Zelanda relativas al bienestar social, o bien precedieron a la Carta de las Naciones Unidas y sus pactos o se desarrollaron a partir de ellos al mismo tiempo que se realizaba la formulación de principios en los foros internacionales.

Si bien se consideró que las leyes y las prácticas actuales de Nueva Zelanda eran compatibles con los principios expresados en la cuestión IV, había algunas disposiciones relativas a ciertas esferas de comportamiento que no se había considerado necesario reglamentar mediante leyes concretas. En 1972 se aprobó la Race Relations Act para lograr el pleno cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial antes de su ratificación. En la sección III A1 y G y en la sección IV se examinarán diversos aspectos de esta ley.

En la actualidad se están examinando los convenios de la OIT, en particular los relativos al empleo de la mujer, con miras a adecuar la legislación de Nueva Zelanda a la práctica de las Naciones Unidas.

III. ACONTECIMIENTOS DE IMPORTANCIA EN RELACION CON EL RECONOCIMIENTO, LA REALIZACION Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE JULIO DE 1969 Y EL 30 DE JUNIO DE 1973, CON REFERENCIA, EN SU CASO, A LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS Y LOS REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROMULGADOS Y LOS FALLOS DICTADOS POR LOS TRIBUNALES

A. EL DERECHO AL TRABAJO

1. Derecho a la libre elección del trabajo

Toda persona puede realizar cualquier tipo de trabajo que esté disponible y para el cual esté calificada. No obstante, hay restricciones para el ingreso a determinadas profesiones que exigen la posesión de ciertas calificaciones mínimas, aunque la posibilidad de adquirir tales calificaciones está al alcance de todos. La Race Relations Act, 1971, concebida para fortalecer y promulgar la igualdad racial en Nueva Zelanda, aplica las disposiciones de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Entre otras cosas, se refiere a la discriminación en el empleo por motivos de color, raza u origen étnico o nacional.

En virtud de la sección 5 de la ley, es ilegal que un empleador o un agente en su nombre, por motivos de color, raza, u origen étnico o nacional, se niegue a emplear o no emplee a una persona en un trabajo para el cual está calificada, se niegue a ofrecer o brindar o no ofrezca ni brinde a una persona las mismas condiciones de empleo y de trabajo y las mismas oportunidades de capacitación y promoción que se ponen a disposición de personas con las mismas calificaciones y empleadas en las mismas circunstancias en un trabajo semejante; o despidan a una persona en circunstancias en las cuales otras personas empleadas por ese empleador en un trabajo semejante no son o no serían despedidas.

Del mismo modo, es ilegal que un agente de colocaciones discrimine contra el empleo de una persona de la manera arriba señalada y por los motivos mencionados. Sin embargo, es legal negarse a emplear a una persona en razón de su origen nacional en los casos en que el empleo se relacione con la seguridad nacional de Nueva Zelanda.

Es ilegal publicar o exhibir todo anuncio o aviso que indique o pueda entenderse que indica una intención de cometer una violación de esta sección de la ley. En la sección IV de este informe se examina la Race Relations Act en mayor detalle.

## 2. Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

Una considerable proporción de las personas que constituyen la fuerza de trabajo de Nueva Zelanda trabajan en condiciones que están determinadas directa o indirectamente por las disposiciones de numerosas leyes que entraron en vigor antes del período que abarca este informe. En general, las personas a las que no se aplica una legislación relacionada explícitamente con su tipo de trabajo están comprendidas en el ámbito de la State Services Act de 1962, y de leyes complementarias relativas al sector de la administración pública y promulgadas a fines del decenio de 1950 y comienzos del decenio de 1960.

El Departamento de Trabajo se encarga en general de la prevención de accidentes en la industria y de garantizar el bienestar, la salud y la seguridad generales de las personas a las que se aplican las disposiciones de la Factories Act, de 1944, la Construction Act, de 1959 y la Machinery Act, de 1950.

Entre el 1.º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973 se promulgaron las siguientes leyes:

Ley de 1971 sobre el Tribunal de Trabajo Aeronáutico, en virtud de la cual se crea un tribunal para la determinación de las condiciones de empleo de los miembros de tripulación de aeronaves empleados por compañías de navegación aérea de Nueva Zelanda y para crear los medios de solución de conflictos, con la facultad de tomar resoluciones arbitrales y atender quejas de particulares.

Ley de 1969 sobre remuneración y condiciones de empleo en los servicios del Estado, por la que se se fijan las tasas de remuneración y las condiciones de empleo de los asalariados empleados en los servicios del Estado, y se instituyen ciertos tribunales a tal efecto. Las condiciones de empleo que pueden establecerse de conformidad con esta ley son amplias y comprenden lo siguiente:

- a) vacaciones anuales y licencias especiales, licencia de enfermedad, feriados, horas ordinarias de trabajo y período durante el cual debe trabajarse antes de tener derecho al pago de horas extraordinarias;
- b) tasas de remuneración y condiciones relativas a salario mínimo, horas extraordinarias, tiempo de viaje, tiempo de espera, trabajo nocturno, trabajo por turnos y tareas especiales, así como al trabajo en sábados, domingos, feriados y cualquier otro momento fuera de las horas ordinarias de trabajo;
- c) tasas mínimas de remuneración para empleados adultos y para empleados casados;
- d) subsidios por separación del servicio, por lugar de destino oficial, por trabajo insalubre y otros subsidios relativos a las condiciones de trabajo;
- e) subsidios por herramientas y subsidios en forma de retribución adicional por tipos o condiciones de trabajo que la justifiquen;
- f) subsidios para gastos de viaje, relevo, alojamiento, trabajo de noche, asueto, campamentos, traslados y comidas;
- g) las condiciones en que pueden entregarse uniformes y ropa industrial;
- h) para el Departamento de Ferrocarriles del Gobierno de Nueva Zelandia solamente, las retribuciones al personal de locomotoras, calculados sobre la base de las millas recorridas durante un turno cualquiera, y las condiciones en que pueden otorgarse pasajes gratuitos o a precios reducidos para viajar en los ferrocarriles;
- i) para las Fuerzas de Defensa solamente, todos los subsidios, subvenciones, bonificaciones y otros pagos similares, incluso subsidios de ultramar que se otorgan en relación con las condiciones del servicio en las Fuerzas de Defensa.

### 3. Derecho a la protección contra el desempleo y el empleo insuficiente

La mayoría de las personas empleadas en las empresas industriales de Nueva Zelandia, con excepción del personal administrativo superior, están protegidas por resoluciones arbitrales y convenios que han sido negociados entre sus respectivos sindicatos y los representantes de las empresas interesadas. Las resoluciones y los convenios contienen invariablemente una cláusula relativa al despido y la terminación de los servicios de los empleados. Por lo común, un

contrato de servicio mantiene su vigencia hasta que se lo considere terminado ya sea por iniciativa del empleador o del empleado, o por mutuo acuerdo. Cuando el empleo ha sido permanente, suele estipularse en la resolución o en el convenio un período mínimo de preaviso.

Si en una resolución nada se dice acerca de la cuestión de la pérdida de los salarios en caso de que la terminación del empleo no se haya realizado de conformidad con sus estipulaciones, la compensación que corresponde al empleado puede incluir la presentación de una demanda por daños ante la justicia de paz.

Las resoluciones y los convenios se realizan de conformidad con la Industrial Relations Act, de 1973. Esta ley contiene disposiciones para la atención de "quejas personales" en caso de que un empleado considere que ha sido despedido sin motivo alguno. En toda resolución o convenio deben figurar disposiciones para tratar este tipo de demanda.

En virtud de la política de subsidios y pensiones del Gobierno de Nueva Zelanda, una persona que carece de empleo tiene derecho a ser protegida contra pérdidas pecuniarias mediante un subsidio de desempleo y a recibir asistencia complementaria cuando sus ingresos o sus recursos financieros no sean suficientes para hacer frente al costo de la vida y a otros compromisos.

4. Derecho de toda persona que trabaja a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, condiciones de existencia digna

Durante muchos años la base para determinar los sueldos y salarios de la mayoría de los trabajadores ha sido un sistema de conciliación y arbitraje complementado por ordenanzas salariales generales. Aproximadamente la mitad de los asalariados de Nueva Zelanda están sujetos a resoluciones y convenios industriales comprendidos en el ámbito de la Industrial Relations Act, de 1973.

Esta ley reconoce ciertos factores no contemplados en la legislación anterior o parcialmente tomados en cuenta por ella.

La General Wage Order Act, de 1969 establece nuevos mecanismos para formular ordenanzas salariales generales de tiempo en tiempo. Anteriormente, el Tribunal de Arbitraje promulgaba ordenanzas salariales generales en virtud de la Reglamentación de Estabilización Económica. La nueva ley constituyó un intento de reforzar el sistema anticuado e ineficaz de las ordenanzas salariales generales. Los criterios que el Tribunal debe tomar en cuenta al decidir acerca de la promulgación de una ordenanza son los siguientes:

1. Todo aumento o reducción de los precios al por menor.
2. Las condiciones económicas que afecten las finanzas, el comercio y la industria.

3. Todo aumento o disminución de la productividad y el volumen y valor de la producción.

4. Los movimientos relativos de los ingresos de diferentes sectores de la comunidad.

5. Todo aumento o disminución de las tasas mínimas de remuneración.

6. Toda otra cuestión que el Tribunal considere pertinente.

La nueva ley proporciona al Tribunal una orientación para la evaluación de los criterios arriba mencionados estableciendo en la sección 3 (2) que los objetivos de toda revisión deben ser los siguientes:

a) mantener y promover el nivel de vida en la medida en que la economía permita sostener ese ajuste;

b) promover la armonía industrial;

c) mantener y promover las exportaciones de la industria neozelandesa.

La última ordenanza salarial general se promulgó el 1.º de julio de 1974 y otorgó a todos los empleados un 9% adicional sobre sueldos y salarios.

5. Derecho de toda persona, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual

En 1972 se promulgó la Equal Pay Act sobre la supresión y prevención de la discriminación basada en motivos de sexo, o en tasas diferentes de remuneración para los trabajadores y las trabajadoras. La ley establecía la equiparación gradual de la remuneración en cinco etapas anuales, que se completarían en 1977.

La ejecución de la Government Service Equal Pay Act, de 1960, que se aplica a los trabajadores no comprendidos en las disposiciones de la ley de 1972, será examinada en las secciones IV y V de este informe.

6. Derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas

No existe una legislación reciente sobre este asunto, pero desde 1946 la mayoría de los empleados ha gozado del beneficio de una semana de cinco días y cuarenta horas. En rigor, la Industrial Relations Act estipula que ningún convenio entre empleado y empleador establecerá una semana de más de cuarenta horas y cinco días. Todos los empleados disfrutaban de vacaciones anuales pagadas de dos semanas de duración, aunque en la práctica muchos disfrutaban de más del mínimo de dos semanas.



7. Derecho a fundar sindicatos y afiliarse al sindicato de su elección

El sistema de conciliación y arbitraje de Nueva Zelanda se basa en el registro voluntario de sindicatos y asociaciones industriales. La Industrial Relations Act, de 1973, simplificó y consolidó procedimientos que se habían desarrollado en el marco de la antigua Industrial Conciliation and Arbitration Act, a fin de actualizarlos de conformidad con las necesidades presentes. Las insuficiencias de la antigua legislación que hicieron que se formulara la nueva ley se examinan en la sección V de este informe.

Según la sección 104 de la Industrial Relations Act, toda persona que, en virtud de su empleo actual o prometido, pertenece a una clase de trabajadores en la cual se ha constituido un sindicato industrial, y en general no tiene malos antecedentes, tiene derecho a ser admitido como miembro del sindicato. Por otra parte, en la medida en que el reglamento de un sindicato es incompatible con las disposiciones de esta sección, se lo considera nulo o inválido. Sin embargo, ninguna persona está obligada a afiliarse a un sindicato, y se la puede eximir de hacerlo por motivos de conciencia.

En la sección 163 de la ley se dispone que, en Nueva Zelanda con sujeción a ciertas reglas, toda sociedad de personas legalmente asociadas para proteger o promover los intereses de los empleadores o, según sea el caso, de los trabajadores, en una industria determinada o en industrias conexas, puede registrarse como sindicato industrial de empleadores o, según sea el caso, de trabajadores, en virtud de esta ley.

8. Derecho de huelga

En el derecho consuetudinario se reconoce el derecho de huelga, que sin embargo, está limitado por normas legales escritas. En la Industrial Relations Act, de 1973 se dispone que ninguna persona que trabaje en ciertas industrias determinadas (que están relacionadas con servicios esenciales) puede hacer huelga sin haber dado a su empleador, en el mes antes de la huelga y con no menos de 14 días de anticipación, un aviso firmado de su intención de hacer huelga. Sin embargo, la ley no prohíbe otras formas del ejercicio del derecho a negarse a trabajar, y la mayoría de los paros industriales (por ejemplo, reuniones en las que se interrumpe el trabajo) se realizan sin obstáculos.

B. EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCLUSO AL SEGURO SOCIAL EN CASO DE DESEMPLEO, ENFERMEDAD, INVALIDEZ, VIUDEZ, VEJEZ U OTROS CASOS DE PERDIDA DE MEDIOS DE SUBSISTENCIA POR CIRCUNSTANCIAS INDEPENDIENTES DE LA VOLUNTAD

Desde muchos años antes del período que se examina existe en Nueva Zelanda un sistema avanzado de prestaciones y pensiones. La política del Gobierno protege a los miembros de la comunidad contra pérdida o reducción de los ingresos como consecuencia de la vejez, la invalidez, la viudez, la orfandad, el desempleo u otras circunstancias independientes de la voluntad. En la sección I, más arriba

se examina la nueva Accident Compensation Act. El único objetivo de esta ley es garantizar ingresos a quienes se ven privados de la totalidad o parte de su fuente habitual de ingresos como consecuencia de haber sufrido lesiones corporales causadas por accidente.

Toda persona que haya alcanzado los 60 años tiene derecho a recibir una prestación por vejez, con sujeción a ciertas condiciones relacionadas con el lugar de residencia y con el ingreso. Las prestaciones por vejez pueden otorgarse a mujeres solteras entre los 55 y los 60 años que por alguna razón no pueden emplearse normalmente. Las personas de 65 años que satisfacen los requisitos relativos a la residencia tienen derecho a una prestación de jubilación independientemente de las circunstancias financieras en que se encuentren. En la actualidad, el Parlamento tiene ante sí un proyecto de ley en virtud del cual serían obligatorias las contribuciones a una caja de jubilaciones.

Toda persona mayor de 16 años que, en razón de enfermedad o accidente, esté incapacitada temporalmente para trabajar y que, como consecuencia de esa incapacidad, sufra una pérdida en sus ingresos, puede solicitar una prestación por enfermedad.

En los últimos años, se ha concedido en Nueva Zelandia una importancia cada vez mayor a las políticas y los programas de bienestar social en el nivel personal. En 1971 se aprobó la Department of Social Welfare Act para crear un departamento gubernamental encargado de todos los aspectos del bienestar social.

## C. EL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO

### 1. Derecho a una alimentación adecuada

El principio de un nivel de vida adecuado, incluso, entre otras cosas, alimentación suficiente, está incorporado en las leyes de bienestar social de Nueva Zelanda que establecen diversas prestaciones para quienes se encuentren en situaciones de particular necesidad en un momento dado.

Existen además leyes relativas a la alimentación y la nutrición que protegen la calidad de los alimentos. Hay también disposiciones estrictas que rigen el envase, la rotulación, el almacenamiento y la venta de venenos.

La Consumer Information Act, de 1969, entró en vigor el 1º de junio de 1970 sobre la base de que la provisión a los consumidores de una información apropiada constituye un medio efectivo para promover las prácticas honestas en el mercado y permite al consumidor evaluar por sí mismo la calidad, el valor y la conveniencia del artículo que se le sugiere comprar.

El propósito de la ley es que se brinde mayor información al consumidor en los siguientes cinco aspectos:

- i) Información que, según fija la ley, debe figurar en los rótulos de los productos
- ii) Prohibición de rotular los productos de manera errónea o engañosa
- iii) Prohibición de envasar los productos de manera que cause error o engaño
- iv) Prohibición de anunciar los productos de manera errónea o engañosa
- v) Prohibición de hacer declaraciones falsas o engañosas respecto de los precios.

### 2. Derecho a vestido y vivienda adecuados

La política de vivienda del Gobierno comprende la concesión de préstamos a autoridades locales por conducto del Instituto de Préstamos del Estado para viviendas rurales, comunitarias y para pensionistas, incluso renovación urbana. El Instituto también puede otorgar préstamos para fines generales de vivienda, por ejemplo, para beneficio de la comunidad general. Además de los servicios del Instituto de Préstamos del Estado, en virtud de su política de bienestar social, el Gobierno presta asistencia para la financiación de viviendas a familias de medios moderados mediante un adelanto de prestación familiar.

También existen otras fuentes que prestan asistencia a diferentes grupos que pueden estar en una situación de desventaja desde el punto de vista económico, por ejemplo, la Junta de Asuntos Maoríes, que en virtud de una ley de 1935 está

/...

facultada para prestar asistencia financiera a los maoríes y otros polinesios para la construcción de viviendas, incluso adquisición de solares para edificar, reparaciones de viviendas existentes y adiciones a las mismas, y compra de casas.

Desde marzo de 1937 el Estado está construyendo casas y apartamentos para alquilar. Estas viviendas se asignan a los inquilinos en función de sus ingresos y sus necesidades. En 1973 se eliminó el límite de ingresos para los candidatos y se estableció un sistema de prioridades por puntaje.

En 1973 se aprobó la Property Speculation Tax Act para desalentar la compra y venta de tierras con fines especulativos. La ley estableció un impuesto sobre la ganancia, equivalente al 90% de las ganancias obtenidas, excepto en los casos en que las tierras son retenidas durante un período mínimo de dos años antes de ser enajenadas. Se hacen excepciones en los casos en que las tierras son enajenadas con fines no especulativos.

En virtud de la Public Works Act, de 1928, el Gobierno tiene facultades para apropiarse de tierras para la realización de obras públicas, y estas facultades han sido ejercidas recientemente para adquirir tierras en las zonas urbanas o cerca de ellas para proporcionar vivienda de bajo costo a personas que se encuentran en condiciones económicas desfavorables.

### 3. Derecho a los servicios sociales necesarios

Además de los servicios mencionados en los párrafos precedentes, se ha prestado ayuda y asistencia durante algunos años a muchos sectores de la comunidad, incluso a niños desfavorecidos socialmente, abandonados o delincuentes, a personas incapacitadas por enfermedad, accidente o guerra, a niños impedidos física o intelectualmente, a ancianos y a enfermos crónicos, y a madres lactantes.

### 4. Derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia

Se han citado casos concretos de este derecho en otras secciones que se ocupan de las condiciones de trabajo (Industrial Relations Act), la remuneración adecuada (General Wage Order Act), la seguridad social, la compensación por accidentes y los servicios sociales y del consumidor.

### 5. Derecho a la protección y al mejoramiento del medio humano

En los últimos años, la población ha adquirido una mayor conciencia de la necesidad de preservar el medio ambiente y de reutilizar y conservar los recursos. Asimismo, se ha desarrollado una preocupación por los agentes contaminantes que se derivan de la mayor industrialización y afectan tanto a las zonas urbanas como a las zonas rurales.

Ya antes del 1.º de julio de 1969 existían diversas leyes (aproximadamente unos 60 estatutos) que facultaban a las autoridades centrales y regionales a tratar los problemas del medio ambiente.

La aprobación de la Clean Air Act, de 1972 y de la Marine Pollution Act, de 1974 constituye un nuevo adelanto en la preservación del medio ambiente.

El objetivo de la Clean Air Act es promover "la conservación del aire y la disminución de su contaminación". Para lograrlo, la ley establece que todo ocupante de un local, ya sea residencial o industrial, está obligado a controlar y volver inofensivo todo agente contaminante que provenga de ese local. Antes de que una sustancia pueda ser liberada en la atmósfera deben satisfacerse estrictos requisitos.

Además de las facultades generales de control que confiere a las autoridades locales para limitar la contaminación del aire, la ley dispone la creación de zonas de aire limpio a solicitud del consejo local dirigida al Gobernador General. Una Ordenanza del Consejo promulgada en virtud de esta disposición puede autorizar o permitir el uso, en la zona de aire limpio, de equipo para quemar combustible, ya sea en general o de una clase determinada, o de algún combustible determinado o clase determinada de combustible; puede autorizar o permitir el uso de una clase determinada de equipo para quemar combustible; puede establecer el modo de operación de una clase determinada de equipo para quemar combustible; y puede especificar ciertas exenciones hasta una fecha determinada.

También en virtud de esta ley se crea un Consejo del Aire Limpio, cuyas principales funciones son las siguientes:

- a) hacer recomendaciones al Ministro de Salud sobre cuestiones relativas a la prevención y el control de la contaminación del aire.
- b) hacer recomendaciones al Ministro sobre las cuestiones que le remita éste en relación con el desempeño de las funciones que le confiere la ley.

La Marine Pollution Act, de 1974 tiene por finalidad, entre otras cosas, poner en vigor cinco convenciones internacionales: la Convención internacional para la prevención de la contaminación de las aguas del mar por los hidrocarburos, 1954, en su forma enmendada en 1962; el Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en los casos de accidente de contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1969; el Convenio internacional de responsabilidad civil por daños causados por contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1969; el Convenio internacional de constitución de un fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, 1971; y el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972.

La parte I de la ley se relaciona con la prevención de la contaminación. Incluye disposiciones para prevenir o tratar la descarga de petróleo u otros contaminantes y permite la formulación de reglamentaciones que obliguen a los barcos a poseer equipo para prevenir o reducir las descargas o pérdidas de petróleo u otros contaminantes en el mar. Se establece un sistema de permisos para el vertimiento de desechos y otras materias.

La parte II confiere facultades para tratar accidentes de navegación y otros tipos de accidentes marinos que, por la clase de accidente o por la carga que se transporta, constituyen una amenaza de contaminación para las aguas o las costas de Nueva Zelandia o para intereses conexos.

La parte III trata de la responsabilidad civil por daños causados por contaminación y establece, entre otras cosas, una responsabilidad civil en el caso de instalaciones frente a las costas y en los casos relacionados con barcos en que el Convenio internacional de responsabilidad civil no se aplique.

La parte IV se ocupa de la compensación y la indemnización adicionales que deben proporcionarse con cargo a un fondo que establecerá en virtud del artículo 2 de la Convención relativa al Fondo, cuya finalidad es garantizar que haya una plena compensación para los que han sufrido daños que no han sido indemnizados en forma total por el armador.

De conformidad con la recomendación de la Conferencia sobre el Medio Físico, celebrada en 1970, se creó el Consejo del Medio Ambiente. Este órgano está formado por personas que, debido a sus conocimientos en materias relacionadas con el medio ambiente, pueden ejercer una influencia considerable. Incluye representantes de las ciencias, la arquitectura, la industria y la agricultura, así como autoridades regionales, nacionales y municipales, y representantes de los departamentos gubernamentales apropiados. El Consejo se reúne una vez por mes y puede mantener así un continuo programa de investigación en materia de preservación y desarrollo de la calidad del medio ambiente, y examinar las políticas, medidas y recursos necesarios para lograr sus objetivos. Asesora al Ministerio del Medio Ambiente a fin de garantizar la coherencia entre los objetivos del desarrollo y los relacionados con el medio ambiente. La Comisión del Medio Ambiente, contraparte gubernamental del Consejo, también presta servicios al nuevo Ministerio del Medio Ambiente. El reconocimiento de la existencia de un conflicto entre los objetivos económicos y los relacionados con el medio ambiente tuvo como consecuencia la creación, en 1972, del Consejo Asesor en aprovechamiento de tierras, que tiene la tarea de establecer los criterios según los cuales pueden tomarse decisiones prudentes en materia de aprovechamiento de tierras. Su mandato le exige que tome en cuenta los factores físicos, ecológicos, económicos, sociales y ambientales, y que tome medidas para definir más precisamente todos estos factores. Aunque sus decisiones tienen por finalidad principal orientar el aprovechamiento de las tierras que pertenecen al Estado, se espera que puedan ser útiles para todos los que deben adoptar este tipo de decisiones.

#### D. EL DERECHO AL DISFRUTE DEL MAS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD FISICA Y MENTAL

Nueva Zelandia tiene una larga tradición de atención médica gratuita o subvencionada por el Gobierno, que abarca casi todos los aspectos de la salud e incluye beneficios médicos que se aplican a los tratamientos médicos tal como los perciben ordinariamente los médicos en la práctica general. En la parte II de la Social Security Act, de 1964, que administra el Departamento de Salud y se ocupa de estos beneficios, se establecen prestaciones médicas, farmacéuticas, hospitalarias y otras afines para toda persona que resida normalmente en Nueva Zelandia. La responsabilidad por la salud de la nación es asumida en forma

/...

conjunta por el Gobierno central y los gobiernos locales, los médicos particulares, los trabajadores paramédicos, las organizaciones de caridad y religiosas, y los ciudadanos particulares, proporcionando el Gobierno central estímulo, asistencia financiera e incentivos, y asumiendo la responsabilidad general.

1. La reducción de la mortinatalidad y la mortalidad infantil, y el logro del sano desarrollo de los niños

La salud de la madre y el niño están a cargo del Departamento de Salud. Entre las responsabilidades de este Departamento se encuentran el otorgamiento de licencias para hospitales de maternidad y la supervisión de los mismos, la supervisión médica de los recién nacidos, los niños en edad preescolar y los niños en edad escolar, la inspección de escuelas y centros de atención de la infancia y la inmunización de los recién nacidos contra enfermedades epidémicas.

La tasa de mortinatalidad y de mortalidad infantil de Nueva Zelandia es ya una de las más bajas del mundo, y se están realizando todos los esfuerzos posibles para reducirla aún más mediante una cuidadosa aplicación de políticas sanitarias de larga data.

2. El mejoramiento de todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente

El Departamento de Salud y las autoridades locales se ocupan de cuestiones tales como la provisión y la protección de suministros públicos de agua, el tratamiento y la eliminación de aguas residuales, la higiene de los alimentos y las normas de vivienda. Sus objetivos son el mantenimiento de un medio ambiente saludable mediante la aplicación de los principios de la medicina preventiva. El Departamento de Salud, junto con el Departamento de Trabajo, también se encarga de cuidar de la salud de los trabajadores industriales y agropecuarios. Esta tarea incluye la cooperación en prevención de accidentes y el control de la utilización de productos químicos agrícolas. El Departamento de Salud señala a la atención de los funcionarios médicos de sanidad cuya responsabilidad ocupacional ha existido desde 1957, todo problema que pueda plantearse a los inspectores industriales. Sus esfuerzos conjuntos abarcan contingencias tales como la suspensión de los trabajadores por motivos de salud, la aprobación de máscaras de respiración y otros equipos protectores similares, el examen médico de los trabajadores y normas mínimas para primeros auxilios.

En las secciones III A2 y C5 se tratan otros aspectos de la higiene ambiental e industrial.

3. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas

Debido a que, por ley, es obligatorio notificar los casos de enfermedades epidémicas y proceder a su posterior aislamiento para tratarlos, Nueva Zelandia en los últimos años se ha visto casi completamente libre de flagelos tales como

el cólera, la viruela y el tifus. Intensas campañas de inmunización entre los niños en edad escolar han eliminado también enfermedades tales como la poliomielitis y la difteria. Los niveles de vida más elevados, junto con la inmunización y los servicios de atención médica para la infancia, han hecho que los casos de tuberculosos sean raros.

4. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad

En las secciones III 3 y 4, más arriba, se ha tratado la creación de estas condiciones.

E. EL DERECHO DE LA FAMILIA, LA MATERNIDAD Y LA INFANCIA A PROTECCION Y ASISTENCIA

1. Derecho de la familia a protección y asistencia

Nueva Zelanda tiene, además de su sistema general de seguridad y bienestar sociales, una amplia serie de leyes destinadas a mantener, fortalecer y proteger a la familia. Las más importantes entre éstas, anteriores a julio de 1969, son la Ley sobre actuaciones de derecho familiar, de 1968, y la Ley sobre Actuaciones Matrimoniales, de 1963. Existen varios programas de mantenimiento del ingreso a los que puede recurrir una familia en dificultades financieras, mientras que los servicios gubernamentales y voluntarios de apoyo a la familia abarcan el bienestar del niño, la salud familiar y la orientación matrimonial.

2. Derecho de las madres a cuidados y asistencia especiales, incluido el suministro de servicios de puericultura adecuados para permitir que la mujer haga una carrera

Durante varios años los médicos han estado prestando servicios prenatales, neonatales y posnatales, en virtud de la Ley sobre Seguridad Social. Hay clínicas prenatales gratuitas establecidas en conexión con todos los hospitales públicos de maternidad y las salas de maternidad. También se está desarrollando una red de cursos prenatales. En el caso de mujeres que viven lejos de las principales ciudades, los servicios prenatales son prestados por enfermeras públicas empleadas por el Departamento de Salud o por enfermeras de distrito.

3. Derecho de los niños y los jóvenes a cuidados y asistencia especiales

Durante el período que se examina la única nueva ley relativa al bienestar del niño es la Ley sobre la Condición del Niño, de 1969, que se examina en la sección IV de este informe.

Sin embargo, el 1.º de agosto de 1973 entró en vigor una nueva ley relativa a diversos cambios en la estructura administrativa de los Campamentos de Salud del Niño. Las funciones y objetivos de esos campamentos serán los mismos que en virtud



de la Ley sobre Campamentos de Salud, de 1972. Los campamentos, establecidos originalmente para dar a los niños de los grupos económicos inferiores la posibilidad de recuperar la salud en poco tiempo, son ahora valiosos en el sentido en que permiten al niño escapar de la tensión de su medio cotidiano en un ambiente tranquilo, donde una dieta equilibrada se combina con un régimen razonablemente organizado y enseñanza complementaria.

Como se señala en la sección III B *supra*, la Ley de 1971 sobre el Departamento de Previsión Social fue promulgada para coordinar y administrar eficazmente todos los órganos de previsión social dentro de un departamento gubernamental. Una de las principales funciones de este Departamento es la administración de la Ley de Previsión Infantil, de 1925, cuyo objetivo es disponer mejor el mantenimiento, los servicios y el control del niño que se encuentra bajo la protección del Estado y proporcionar en general protección y capacitación al niño pobre, abandonado y delincuente.

La Ley sobre Mayoría de Edad, de 1970, concede la mayoría de edad a los 20 años.

4. Derecho de los padres a determinar libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos

En Nueva Zelanda, la planificación de la familia se considera oficialmente como una medida sanitaria y ha sido practicada ampliamente, sobre una base meramente voluntaria, durante muchos años. Aunque el subsidio de servicios médicos generales normales es pagado por el Gobierno para consultas sobre planificación de la familia, los honorarios adicionales de los médicos clínicos y especialistas son cubiertos por el paciente, en la forma normal. El paciente también debe pagar el costo de los anticonceptivos. Los servicios clínicos se están ampliando gradualmente en Nueva Zelanda y aunque se cobra una pequeña suma por las consultas, a nadie se le niega asistencia porque no pueda pagar. Reconociendo la conveniencia de poner a disposición de todos material sobre planificación de la familia, en los últimos años el Gobierno ha ampliado la función educativa de los funcionarios del Departamento de Salud para que participen activamente en las clínicas de la Asociación de Planificación de la Familia. También se estimula a las Juntas de Hospitales a que abran clínicas que presten al público servicios gratuitos y al mismo tiempo den a los médicos y a las enfermeras experiencia en la esfera de la planificación de la familia.

F. EL DERECHO A LA EDUCACION

1. Derecho a la enseñanza primaria gratuita

Desde 1877 los niños de Nueva Zelanda entre las edades de 5 y 15 años han gozado de educación gratuita sin distinción por razones de raza. La Ley sobre Enseñanza, 1964, dispone una enseñanza gratuita y laica en las escuelas estatales y secundarias para los niños entre las edades de 5 y 19 años, y educación obligatoria para todos los niños entre las edades de 6 y 15 años, a menos que sea aplicable una exención específica de las previstas en la sección 109 de la Ley.

2. Derecho a la igualdad de acceso a la enseñanza superior, sobre la base de la capacidad o el mérito, incluso la enseñanza técnica, vocacional y profesional

En todos los tipos de enseñanza secundaria a disposición de los niños de Nueva Zelanda, ha habido recientemente una tendencia a ajustarse a un plan de materias básicas como: inglés, matemáticas, ciencias sociales y naturales, música y artesanías. También se da orientación vocacional en los niveles secundario y superior.

La supresión del examen de capacidad en 1936 eliminó la última barrera de acceso a la enseñanza secundaria. En los últimos años el ingreso a la universidad no ha dependido necesariamente de la aprobación de un examen y desde 1968 se ha hecho ley la aprobación de materias por separado, y no una aprobación total mediante el otorgamiento del Certificado Escolar. La tendencia ha sido a apartarse de la rígida y arbitraria certificación de la capacidad del estudiante mediante el examen nacional y acercarse a una evaluación más personal por sus maestros.

La educación universitaria se proporciona en virtud de la Ley de Universidades de 1961, y está subvencionada por una escala móvil de becas y asignaciones de acuerdo con el nivel de capacidad y el grado de necesidad del estudiante.

3. Derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos

Con sujeción a la disposición que obliga a todos los padres a permitir que sus hijos reciban una educación, aquéllos pueden escoger el tipo de educación que deseen para sus hijos. Además de las escuelas estatales primarias y secundarias, donde la educación gratuita constituye un derecho, los padres también pueden matricular a sus hijos en escuelas privadas registradas en virtud de la Ley de Educación, de 1964.

Las escuelas religiosas reciben asistencia estatal para la compra de equipo básico y algunos gastos de administración en la misma escala que las escuelas primarias y secundarias del sistema nacional. La Ley de 1962 permite la instrucción religiosa sobre una base flexible en las escuelas primarias estatales durante media hora a la semana, pero esa instrucción no es obligatoria.

Pueden establecerse escuelas privadas después de solicitar su registro al Director General de Educación y cuando él esté convencido de que el local, el personal, el equipo y los programas de estudio son adecuados, esas escuelas se someten a las mismas normas docentes y al mismo sistema de inspección de las escuelas del sistema nacional.

G. EL DERECHO A TOMAR PARTE LIBREMENTE EN LA VIDA CULTURAL

1. Derecho a tomar parte en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones

Los neozelandeses consideran axiomático su derecho a participar libremente en todas las esferas de la vida y cultura de Nueva Zelandia. En 1971 este derecho generalmente aceptado fue promovido aún más mediante la incorporación en la Ley sobre Relaciones Raciales de disposiciones para proteger, entre otras cosas, los derechos a gozar de diversas formas de cultura, mediante el establecimiento de asociaciones culturales sin obstáculo, prohibiéndose la discriminación por razones de color, raza u origen étnico o nacional en relación con:

- a) El acceso del público a lugares, vehículos e instalaciones;
- b) El suministro de mercancías y servicios;
- c) El empleo; y
- d) La tierra, la vivienda y otros tipos de alojamiento.

La sección 9 de la Ley sobre Relaciones Raciales estipula, sin embargo, que cualquier acto que contravenga lo mencionado precedentemente no constituye infracción si:

a) El acto u omisión se comete de buena fe con el objeto de evaluar o promover a determinadas personas o grupos de personas o a personas de determinado color, raza, origen étnico o nacional; y

b) Esos grupos o personas necesitan o puede suponerse razonablemente que van a necesitar asistencia para su adelanto, con el objeto de lograr un lugar igual al de otros miembros de la comunidad.

El Gobierno de Nueva Zelandia no sólo está interesado en preservar los derechos culturales, sino también en ofrecer estímulos al desarrollo de una sociedad culturalmente rica. Se dice que si los neozelandeses no se esfuerzan por preservar su herencia de origen mixto europeo, polinesio y asiático, su identidad nacional característica puede resultar perjudicada por una cultura internacional, comercializada.

Se hacen todos los esfuerzos posibles para lograr que, aunque los niños de todos los sectores de la comunidad reciben su enseñanza escolar exactamente bajo las mismas condiciones, la igualdad de educación no signifique educación uniforme. A principios del decenio de 1930 se notó un cambio radical de la tendencia educacional a crear una sociedad uniformemente "europea". Actualmente se hacen todos los esfuerzos posibles para promover la conciencia y el orgullo de la cultura maorí incluyendo en los programas escolares materiales relacionados con la cultura e historia maoríes. Al mismo tiempo, se reconoce la necesidad de preparar a los niños maoríes y a otros niños polinesios para que actúen en una sociedad multirracial.

Con la creación de una Fundación para la Educación Maorí en 1961, los esfuerzos han estado mejor dirigidos a estimular a los maoríes a aprovechar las oportunidades educacionales que se les ofrecen.

El reconocimiento de que todos los neozelandeses pueden beneficiarse con una pluralidad de culturas ha provocado un resurgimiento del interés en la cultura y la herencia polinesia, y en particular la maorí. Por ejemplo, el interés por el idioma maorí ha hecho que se lo incluya en la enseñanza universitaria, que se ofrezcan más programas de radio y televisión en idioma maorí y que se proponga la enseñanza de este idioma a todos los neozelandeses en las escuelas secundarias como segunda lengua. Además, actualmente el Parlamento tiene ante sí un proyecto de ley por el que se da carácter oficial al idioma maorí, condición que actualmente sólo posee el idioma inglés.

Otras indicaciones del deseo de conservar la herencia polinesia de Nueva Zelanda puede verse en la legislación que actualmente estudia el Parlamento, que dispone que todos los artefactos maoríes encontrados en Nueva Zelanda a partir del 1.º de febrero de 1975 sean propiedad del Estado; solamente el Secretario de Asuntos Internos podrá dar permiso para la exportación de esas antigüedades; se establecerá y registrará la propiedad de artefactos maoríes; se prohibirá la venta de artefactos a quien no sea coleccionista registrado, representante de un museo público, subastador autorizado o comerciante en objetos de segunda mano.

El Gobierno estableció el Consejo para las Artes con el objeto de dar apoyo a los dramaturgos, pintores, escultores y a una variedad de actores y artistas. Sus subvenciones al ballet, la ópera y el teatro aseguran que una mayor parte del público pueda gozar de estos servicios culturales. El Consejo también ofrece asistencia a sociedades cinematográficas, a una Conferencia de Escritores y Artistas maoríes, a festivales de artes polinesias, a periódicos literarios, a publicaciones en idioma maorí; a galerías artísticas y centros culturales. También patrocina a artistas visitantes del extranjero que, a su juicio, pueden hacer una valiosa contribución a la cultura de Nueva Zelanda. Actualmente el Consejo está dedicado a la publicación de libros que mantienen un cuidadoso registro de las formas artísticas autóctonas de Nueva Zelanda. En 1973 empezó un importante cambio de política cuando la Junta de la Lotería Estatal, por recomendación del Consejo, dio un subsidio de aproximadamente 300.000 dólares para salas de concierto, teatros y museos.

2. Derecho a la protección de los intereses morales y materiales que resulten de las producciones científicas, literarias o artísticas

En 1973, se reconoció a los autores de Nueva Zelanda el derecho a percibir ganancias por el hecho de que sus obras se encontraban en las bibliotecas públicas, mediante la introducción de un sistema de pago del Fondo Literario Estatal. Un escritor debe haber sido residente de Nueva Zelanda durante más de dos años y tener más de 50 ejemplares de su obra colocados en el sistema de bibliotecas públicas para poder tener derecho a un subsidio. Las asignaciones se hacen de acuerdo con el número de ejemplares en circulación.

Desde antes de 1969 existía en Nueva Zelandia un mecanismo para proteger los intereses resultantes de las producciones científicas, literarias o artísticas en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual, de 1962, y la Ley sobre Marca Registrada, de 1953. Estas leyes consolidaban leyes anteriores relativas a la marca registrada y a la propiedad intelectual, que habían existido desde 1908.

La Ley de Propiedad Intelectual, de 1962, protege las obras originales y el derecho exclusivo, previa solicitud, a realizar y a autorizar a otras personas a realizar ciertos actos en relación con ese trabajo. La propiedad intelectual puede existir con respecto a obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas; grabaciones de sonido; emisiones de televisión y emisiones de sonido; películas cinematográficas, ediciones de obras. Existen algunas excepciones, por ejemplo, en las bibliotecas, las universidades y las escuelas.

La Ley sobre marca registrada, de 1908, reconoce dos tipos de marcas de fábrica que pueden registrarse en virtud de la Ley, y otorga diferentes derechos con respecto a cada una. El registro en el que se anota la propiedad de la marca, se divide por lo tanto, en secciones A y B.

El registro en la sección A da a la persona que gestiona el registro el derecho exclusivo a utilizar la marca registrada con respecto a mercancías. Ese derecho se considerará infringido por toda persona, que no sea el propietario de la marca registrada o usuario registrado de la misma, que utilice una marca idéntica a ella o una que se le parezca tanto que pueda causar confusión en el comercio.

Para poder registrar una marca en la sección A, deben satisfacerse los requisitos siguientes:

- a) El nombre de la compañía, el individuo o la empresa debe estar registrado de manera especial o particular;
- b) Debe contener el nombre del solicitante o de algún predecesor en su negocio;
- c) Debe contener una palabra o palabras inventadas;
- d) Debe contener una palabra o palabras que no se refieran directamente al carácter o la calidad de la mercancía y que no sea, en su significado ordinario, un nombre geográfico o un apellido;
- e) Debe poseer una marca distintiva.

El registro en la sección B del Registro da a la persona los mismos derechos que los que se enumeran supra con respecto al registro en la sección A. Sin embargo, algunos recursos judiciales a que da derecho el registro en la sección A no son válidos si el demandado puede demostrar que la utilización de la que el querellante se queja no engañará o causará confusión o será interpretada como indicativa de una conexión en el comercio entre las mercancías y alguna otra persona que tenga derecho a utilizar la marca registrada como propietario o como usuario registrado.

Para solicitar un registro en la sección B, la marca registrada debe poder distinguir las mercancías con las que el propietario de la marca registrada está o puede estar conectado, de las mercancías con las que no existe esa conexión. Al determinar esto, debe prestarse atención a la medida en que:

- a) La marca registrada puede ser distinguida intrínsecamente;
- b) La marca registrada puede de hecho ser distinguida debido a su utilización o a cualquier otra circunstancia.

#### IV. MEDIDAS ENCAMINADAS A ASEGURAR EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS MENCIONADOS EN LA PARTE III SIN DISTINCION DE NINGUN TIPO

Debido a la notable distribución equitativa de la riqueza y los recursos en Nueva Zelandia y a la limitada variedad de estratos sociales, en el pasado no se ha considerado necesario ni conveniente decretar leyes sobre actitudes sociales. Sin embargo, en casos en que esas actitudes puedan dar por resultado la discriminación contra las minorías dentro de la comunidad, se han decretado leyes para asegurar los derechos de esos grupos.

Un ejemplo de ese tipo de legislación es la Ley sobre la Condición del Niño, de 1969, destinada a corregir una situación social concreta en que la actitud de algunos sectores de la comunidad estaba atrasada con respecto a la norma conveniente postulada en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Esta ley, que entró en vigor el 1.º de enero de 1970, suprimió, con algunas pocas excepciones de competencia, procedimiento y prueba, la condición jurídica de ilegitimidad y ha eliminado el término "ilegítimo" de las leyes neozelandesas. La filosofía de esta ley es que el derecho no debe discriminar contra ningún niño o imponerle impedimentos solamente por razón del accidente de su nacimiento.

La Ley sobre Relaciones Raciales fue promulgada en 1971. El propósito de esta ley es asegurar que todas las personas, independientemente del color, la raza o el origen nacional, tengan derecho de acceso a lugares, vehículos, instalaciones, mercancías, servicios, empleo, tierra, vivienda y otro tipo de alojamiento y prohíbe la publicidad que pueda razonablemente considerarse como una incitación al prejuicio racial.

Para lograr estos objetivos, se creó el puesto de Conciliador de Relaciones Raciales. Sus funciones principales son investigar, por su propia iniciativa o por alguna denuncia, cualquier acto u omisión o cualquier práctica que constituya o parezca constituir una infracción a lo dispuesto en las secciones 3 a 7 de la Ley sobre Relaciones Raciales. (En estas secciones se prevén la incitación a la discordia, la discriminación en el empleo, el acceso a los lugares públicos, etc., el suministro de mercancías o servicios, la vivienda y otros tipos de alojamiento.) Además, debe actuar como conciliador en relación con cualquiera de esos actos, omisiones o prácticas, y tomar las medidas que se prevén en la ley.

Si, después de investigar la denuncia, el Conciliador está convencido de que se ha cometido una infracción, debe tratar de lograr un arreglo entre las partes interesadas y obtener una garantía de que el comportamiento que es objeto de queja no se repetirá. Cuando no pueda hacerlo, podrá iniciarse acción civil contra el transgresor. Cuando el Tribunal tenga el convencimiento de que se han infringido las disposiciones de la Ley, su fallo podrá consistir en:

- a) Una declaración de que el demandado ha violado la Ley;
- b) Un mandamiento por el que se prohíba al demandado actuar en el futuro contra la ley y repetir la infracción;

- c) La determinación de daños y perjuicios calculados según la pérdida y el costo pecuniario, todo lucro cesante y toda humillación, pérdida de dignidad y lesión a los sentimientos de la persona agraviada;
- d) Una declaración de que es ilegal cualquier contrato concertado o realizado en contravención de cualquiera de las disposiciones de las secciones 3 a 7;
- e) Reparación de conformidad con la Ley sobre Contratos Ilegales; o
- f) Cualquier otra reparación que el Tribunal considere justa.

La Ley también dispone una multa de un máximo de 400 dólares en los casos en que se pronuncie sentencia de conformidad con los procedimientos penales por la negativa a permitir el acceso a instalaciones y servicios públicos solamente por motivos de raza, color, origen étnico o nacional de una persona. Se impondrá una condena de prisión no superior a tres meses o una multa a cualquier persona que incite a la discordia racial publicando o distribuyendo material escrito o difundiendo por radio material que sea amenazador, abusivo o insultante, o utilizando en cualquier lugar palabras que puedan provocar la hostilidad o la mala voluntad, o el desprecio o el ridículo, hacia cualquier grupo de personas residentes en Nueva Zelanda por motivos de color, raza u origen étnico o nacional de ese grupo de personas.

De acuerdo con sus objetivos de eliminar y prohibir los actos y el comportamiento discriminatorios desde el punto de vista racial o étnico, la Ley establece además que las condiciones, expresadas oralmente o contenidas en un instrumento escrito, tendientes a impedir un matrimonio por esas razones, son nulas y no tendrán efecto.



V. DIFICULTADES CON QUE SE HA TROPEZADO AL ASEGURAR EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS MENCIONADOS EN LA SECCION III SUPRA Y MEDIDAS Y METODOS ADOPTADOS PARA VENCERLAS

Como se expuso precedentemente en el informe sustantivo sobre la sección III A en teoría, la única limitación a la elección de empleo es el grado de aptitud del que solicita el empleo. En la práctica, los empleadores pueden, por ejemplo, mostrarse reacios a emplear a una persona que se acerque a la edad de jubilación debido a que tendrán que encontrar a otra persona para ese puesto unos cuantos años después. Las mujeres en edad de procrear pueden verse limitadas en su elección de empleo por la misma razón. Sin embargo, el grado de discriminación contra sectores de la comunidad es difícil de evaluar. En general, Nueva Zelanda padece una escasez crónica de mano de obra y, por lo tanto, se enfrenta a problemas de exceso de empleo, y no de subempleo. La necesidad de notificar con anticipación el despido puede con frecuencia discriminar contra el empleador, en los casos en que no tiene recurso aplicable contra los empleados informales.

Un examen hecho por las autoridades laborales de Nueva Zelanda de la Ley sobre Igualdad de Salarios en el Servicio Gubernamental, de 1960, reveló ciertas deficiencias en la Ley cuando se la comparó con la Ley más reciente sobre Igualdad de Salarios, de 1972. En la primera ley no se da una definición suficiente de los términos "salario" o "sueldo", y la igualdad se aplicaba solamente al salario o al sueldo justo; no abarcaba prestaciones adicionales, como asignaciones, comisiones y primas.

La Ley sobre Relaciones Industriales, de 1973, reconoció que las leyes anteriores sólo habían tomado parcialmente en cuenta el hecho de que las relaciones industriales no pueden separarse del desarrollo social y económico general y que en tiempos de condiciones difíciles de trabajo, el interés del empleador y del sindicato no es suficiente para proteger el interés público. También reconoció que una interrupción de comunicación entre las partes en un conflicto con frecuencia ha resultado en que no pueda lograrse una solución satisfactoria de los motivos de queja. Debe recurrirse con ese fin a negociadores capacitados y hay que proporcionar conductos de fácil acceso para permitir que las denuncias se tramiten con prontitud.

En 1969 la Comisión Real sobre Seguro Social examinó la posición de pequeños grupos de personas social o económicamente en desventaja en la sociedad neozelandesa. Se estableció que, si bien las personas como los padres solos, las madres solteras, las esposas abandonadas y las esposas de internados en hospitales para enfermos mentales, tenían derecho a recibir subsidios de emergencia en virtud de la legislación anterior, no tenían derecho estatutario a esos subsidios y con frecuencia ignoraban su derecho a la asistencia gubernamental. Como resultado de esto, en noviembre de 1973 se promulgó una ley que confería carácter estatutario a este derecho en virtud de la Ley de Protección Familiar. (Domestic Purposes Act)

A pesar de las bajas tasas de nacimientos y de mortalidad logradas como resultado de los servicios sanitarios y de asistencia social de Nueva Zelanda, las estadísticas muestran que hay lugar para mejoras. La tasa perinatal, en la que se

han realizado progresos, refleja la capacidad de reproducción de la madre y la calidad de los servicios obstétricos que ha recibido. Las cifras de Nueva Zelanda en estas esferas son parecidas a las de los países escandinavos. Estas mejoras se han logrado principalmente con el perfeccionamiento de las normas sobre servicios obstétricos y pediátricos neonatales. Sin embargo, el examen de las tasas posneonatales muestra claramente las deficiencias en Nueva Zelanda. Reflejan el medio ambiente fuera del hospital y los cuidados insuficientes dados por algunos padres que no están preparados para desempeñar su papel. Las muertes en este grupo de edad se deben en general a enfermedades epidémicas, gastroenteritis, infecciones respiratorias y accidentes.

La tendencia de la mujer a reintegrarse a la fuerza de trabajo cuando el niño aún es pequeño, particularmente en el caso de las mujeres maoríes que tienden a dejar a sus hijos desde una edad más temprana que los de sus contrapartes europeas, también impone tensiones a la familia, particularmente si los hijos son muy pequeños y si la madre trabaja entre embarazos por necesidad económica. La temprana fecundidad entre las mujeres polinesias, combinada con las presiones de la urbanización, está provocando preocupación debido a los problemas sanitarios y sociales asociados con la inmadurez física y emocional.

Es necesario suministrar más servicios de puericultura para facilitar la posibilidad de que la mujer elija funciones dentro de la sociedad y asegure así el bienestar de la familia. La antigua opinión de que la educación de una niña debe tener principalmente por objeto prepararla para una función como esposa y madre, ha cedido el paso al reconocimiento de la necesidad de aprovechar mejor las oportunidades iguales de educación. Se reconoce ahora la conciencia creciente de la importancia de las relaciones entre las personas como parte del proceso de educación. Se espera que pronto se incluyan en los programas de enseñanza secundaria cursos sobre la estructura de la vida de la familia contemporánea.

En la actualidad la planificación de la familia se acepta ampliamente pero su práctica aún no está generalizada. Para algunos, los gastos constituyen un obstáculo; otros están influidos por la tradición cultural o las creencias religiosas y otros no utilizan los servicios disponibles por falta de reflexión, motivación o comprensión.

La implantación de la enseñanza gratuita y obligatoria provocó muchos problemas que se están resolviendo con el tiempo. Entre éstos está una utilización más intensa de los recursos educacionales como edificios, personal y equipo. Se encontraron nuevos problemas al pasar del rígido sistema de enseñanza tradicional a formas más liberales; esto ha sido contrarrestado mediante una revisión intensa de los programas de estudio y campañas de actualización de conocimientos para maestros, manteniendo los niveles de contratación en la profesión.

Se han adoptado medidas para impedir que haya sectores sociales infantiles que sufran cualquier forma de desventaja. Los niños de las comunidades rurales aisladas siguen cursos por correspondencia para completar sus años de escuela y se les otorgan becas para asistir a escuelas secundarias de la ciudad o del

/...

distrito. En los isleños han sido necesarias medidas más radicales para que no se prive a la población local de la fuerza de apoyo de su propia cultura antes de haber alcanzado un entendimiento más que superficial de la sociedad europea.

En cuanto a la cuestión de la participación en la vida cultural, la dificultad con que se tropieza más frecuentemente no es cómo impedir que se abuse del derecho, sino cómo hacer que los neozelandeses tengan más conciencia de este derecho y de las muchas esferas que tienen abiertas ante sí para sus esfuerzos.

El único problema notable en la protección de la propiedad intelectual en los últimos años ha sido el de la medida en que debe permitirse la distribución de material escrito en forma de fotocopias. Este problema ha sido planteado por la dificultad de obtener suficientes ejemplares de obras para las clases universitarias dentro del período limitado de estudio. Como resultado de un considerable debate público sobre esta cuestión, ahora se admite generalmente que será necesario un cambio en las leyes sobre propiedad intelectual.

Ahora que las escuelas maoríes, que originalmente fueron creadas para facilitar la transición del maorí rural a las complejidades de la sociedad europea, han sido integradas en el sistema nacional de educación, se han facilitado los intentos para superar las dificultades de idioma y de motivación. La creciente insistencia en la importancia igual de los valores maoríes ha permitido reconciliar más fácilmente las diferencias culturales que percibe el niño entre su hogar y la escuela, a la vez que le ha permitido apreciarlas (el examen de esta cuestión figura en la sección III G). Sin embargo, aún existe la necesidad de contratar a maestros maoríes para trabajar en zonas en las que aún no se aprecia plenamente el deseo nacional de obtener una identidad neozelandesa en la cual uno de los componentes sea la cultura y la tradición maoríes.

-----